



SENTENCIA

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	Jairo Humberto Álvarez Tobón
DEMANDADOS	Fabricato S.A. Porvenir S.A. Colpensiones
RADICADO	05-088-31-05-001-2020-00003-01
TEMA	Relación laboral, aportes a la seguridad social
DECISIÓN	Confirma sentencia

El quince (15) de mayo de dos mil veintitrés (2023), el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, integrada por los magistrados **HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ, CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA** y **GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**, quien actúa como ponente, previa deliberación del asunto, según consta en el **ACTA 093** de discusión de proyectos, procede a dictar sentencia de segunda instancia dentro del proceso ordinario promovido por **JAIRO HUMBERTO ÁLVAREZ TOBÓN** contra **FABRICATO S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PORVENIR S.A.,** y la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES-**, con radicado 05-088-31-05-001-2020-00003-01

- **RECONOCIMIENTO DE PERSONERÍA:**

En los términos de la sustitución de poder conferido por el doctor **RICHARD GIOVANNY SUAREZ TORRES**, en calidad de apoderado judicial para procesos de **COLPENSIONES** de la firma **RST ASOCIADOS PROJECTS S.A.S.**, de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso, el despacho le reconoce personería suficiente para actuar a la doctora **SARA BOTERO GARCÍA**, identificada con cédula de ciudadanía 1.017.257.197 y

portadora de la tarjeta profesional N° 340.780 del Consejo Superior de la Judicatura, para que continúe la representación judicial de COLPENSIONES.

- **PRETENSIONES:**

Aspira el demandante, de manera principal, se declare que prestó servicios como mecánico de la empresa Diversificación Industrial de San Pedro S.A.S, en adelante Divisa S.A.S liquidada, desde el 20 de junio de 1983 hasta diciembre de 2001, sin solución de continuidad. Que la empresa Divisa S.A.S liquidada estaba subordinada a Fabricato S.A. en su condición de empresa matriz. Que, como consecuencia de la liquidación de la empresa subordinada, Fabricato S.A es responsable de atender las obligaciones laborales adquiridas por Divisa S.A.S liquidada. Que esta última, controlada por Fabricato S.A., incumplió sus obligaciones en calidad de empleador relativo a los aportes al sistema de seguridad social integral respecto a los períodos comprendidos entre el 20 de junio de 1983 hasta el 30 de abril de 1994. Que, como consecuencia de lo anterior, se condene a Fabricato S.A. a efectuar los aportes retroactivos al Sistema de Seguridad Social en Pensiones ante Colpensiones de los períodos comprendidos entre el 20 de junio de 1983 hasta el 30 de abril de 1994. Que se condene a Colpensiones a recibir los aportes retroactivos en pensiones, a actualizar la historia laboral, trasladar el bono pensional correspondiente a Porvenir S.A. una vez haya recibido la totalidad del pago de los aportes comprendidos entre el 20 de junio de 1983 hasta el 30 de abril de 1994, y de ser posible iniciar seguimiento y cobro coactivo para lograr la totalidad del pago. Que se condene a Porvenir S.A., actualizar la historia laboral, con el objeto de incluir el bono pensional dentro de la cuenta de ahorro individual; asimismo que se disponga de la indexación de todos los derechos que lleguen a reconocerse, que se de aplicación de los principios de ultra y extra petita, y se condene a las costas y agencias en derecho.

- **HECHOS:**

Las anteriores pretensiones se fundaron en los siguientes hechos: Que desde el 20 de junio de 1983 hasta diciembre de 2001 laboró para Divisa S.A.S, en calidad de mecánico de mantenimiento general. Que estuvo afiliado al Instituto

de Seguro Social hoy Colpensiones hasta el año 1994, fecha en que se trasladó a Porvenir S.A encontrándose activo en esa AFP. Que Divisa S.A.S estaba bajo control de la empresa Fabricato S.A., conforme el certificado de existencia y representación legal de fecha del 20 de septiembre de 2016. Que, conforme al certificado relacionado, el objeto social de Fabricato S.A., y Divisa S.A.S, es la fabricación y el mercado de materiales textiles, siendo actividades similares, conexas o complementarias. Que Fabricato S.A., se encuentra registrada como grupo económico en la Cámara de Comercio de Medellín, siendo la matriz de Divisa S.A.S, liquidada en marzo de 2017. Que, en la historia laboral aparecen reflejadas las semanas cotizadas por Divisa S.A.S, comprendidas entre el 1° de mayo de 1994 hasta diciembre de 2001, para un total de 394.²⁸ semanas. Que los períodos de pensión entre el 20 de junio de 1983 hasta el 30 de abril de 1994 no se encuentran reflejados en la historia laboral, faltando un equivalente de 11 años de aportes dejados de pagar por parte de Divisa S.A.S. Que cumplía órdenes, cumplía un horario de trabajo diario, recibía una contraprestación directa por el servicio y cumplía sus labores con los elementos y la infraestructura determinado e impuesto por Divisa S.A.S. Que actualmente en la historia laboral tiene un total de semanas cotizadas a Porvenir de 1.302, sin tener presente que, con los aportes del 20 de junio de 1983 al 30 de abril de 1994, se acreditaría un total de 1.860 semanas. Que el 25 de abril de 2019, presentó un derecho de petición a Fabricato S.A, tendiente a solicitar la corrección de la historia laboral y/o pago de aportes en pensiones en el fondo de pensiones. Que el 11 de junio de 2019, Fabricato S.A. indicó que no está en posibilidad de facilitar la información por cuanto Divisa S.A.S es una sociedad independiente de Fabricato S.A., por lo que no se encuentra legitimada para realizar las gestiones tendientes a la corrección de su historia laboral. Que el 15 de agosto de 2019 solicitó a Colpensiones la corrección de la historia laboral con el fin de lograr que los periodos comprendidos entre el 20 de junio de 1983 al 30 de abril de 1994 laborados para Divisa S.A.S aparecieran reflejados en la historia laboral. Que Colpensiones mediante oficio del 6 de noviembre de 2019 indicó que con Divisa S.A.S no se encontraron registros de pago para los períodos reclamados. Que Fabricato S.A. por ser la matriz de Divisa S.A.S es responsable subsidiariamente en la medida que su subordinada no cumplió con sus obligaciones laborales.

- **CONTESTACIONES:**

Colpensiones: No se opuso a las pretensiones relacionadas con la declaratoria de la relación laboral, no obstante, manifestó que se deberá exonerar a la entidad de condena en costas o agencias en derecho, dado que no ha dado lugar al litigio. Que lo único que guarda relación con las funciones de la entidad, es la eventual recepción de aportes, lo cual queda sujeto a que el despacho acceda a las pretensiones de la demanda. Finalmente indicó que se opone frente a cualquier declaración o condena que vaya en contra de la entidad. Para su defensa formuló las excepciones de mérito que denominó: falta de legitimación en la causa por pasiva, buena fe, prescripción, imposibilidad de condena en costas.

Fabricato S.A.: Se opuso a la totalidad de las pretensiones principales y subsidiarias. Para su defensa formuló las excepciones de mérito que denominó: inexistencia del vínculo laboral, inexistencia de unidad de empresa entre Divisa S.A. y Fabricato S.A., inexistencia de responsabilidad subsidiaria de Fabricato S.A., compensación y pago.

- **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:**

Mediante sentencia del 24 de enero de 2022, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bello **ABSOLVIÓ** a Fabricato S.A., Colpensiones y Porvenir S.A. de todas las pretensiones formuladas en su contra por el señor Jairo Humberto Álvarez Tobón. **CONDENÓ** en costas al demandante y en favor de las demandadas.

- **APELACIÓN:**

Demandante: La decisión anterior fue recurrida en apelación por el demandante, argumentando que, si bien en las pretensiones no consta la declaratoria de contrato realidad, es posible que se pueda dar aplicación al principio de ultra y extra petita, considerando que con los testigos y las pruebas allegadas se demostró que la subordinación, la prestación del servicio, los horarios, los permisos y los salarios venían de Fabricato S.A. Asimismo,

manifestó que discrepa de lo concluido por el *a-quo*, en cuanto a que no se logró acreditar la dominación económica de Fabricato S.A. frente a las subordinadas, indicando que no le asiste razón al fallador de primera instancia toda vez que en el informe de gestión del año 2016 (folio 90 y 98), el certificado de existencia y representación y lo reconocido por el representante legal de la empresa en el interrogatorio de parte, se logra evidenciar el control y dominio económico que tenía Fabricato S.A. sobre Divisa S.A.S liquidada. Agregó que algunos documentos allegados cuentan con logotipos de Fabricato (folio 60 y 62), que dan cuenta que el lugar donde laboraba era Divisa S.A.S y que la fecha de ingreso fue el 20 de junio de 1983. Finalmente manifestó que se logró acreditar la unidad de empresa toda vez que existen actividades complementarias y conexas, así como la dependencia económica. Por lo anterior, solicita se modifique la sentencia de primera instancia.

- **ALEGATOS:**

Demandante: reiteró los argumentos expuestos en la apelación. Indicó “(...) *obsérvese que esta orden constitucional de emitir fallos extra y ultra petita cuando se trate de derechos fundamentales es una institución procesal muy diferente a la contenida en el artículo 50 del código procesal de trabajo y seguridad social, en este ultimo caso los fallos extra y ultra petita son solo para ajustar sumas de dinero no solicitadas en unas indemnizaciones pero en el caso de los derechos fundamentales sociales es para la prevalencia o eficacia real en el estado social de derecho de los derechos sociales fundamentales*”. Agregó sobre el contrato realidad que “*De las declaraciones testimoniales y de los documentos anexados con el escrito de la demanda, ninguno refutado o negado por la parte accionada, se puede deducir que el señor JAIRO HUMBERTO ALVAREZ TOBON, debía ejercer personalmente sus funciones, cumpliendo un horario y jornada laboral impuesta por la demandada, mismas que ejercía dentro de las instalaciones de FABRICATO S.A bajo órdenes impartidas por su jefe inmediato, configurándose entonces, los tres elementos del contrato de trabajo.*” Finalmente indicó que “*La relación laboral entre el demandante y las demandas se mantuvo vigente hasta el año de 2001 y la subordinación de FABRICATO S.A hacia DIVISA S.A.S se presentó a partir del año 1996, situación que no impide que la matriz asuma el pago de aquellas acreencias adeudas por la subsidiada. Si FABRICATO S.A decidió controlar a DIVISA en el año 1996, ese control implica también asumir las obligaciones pendientes y para el año de 1996 DIVISA S.A.S tenia pendiente reconocer y pagar los aportes correspondientes al año de 1982 a 1994. La ley no establece en que momento y a partir de cuando la matriz se hace responsable de las obligaciones contraídas por la subordinada por lo que en el presente caso se debe realizar una interpretación favorable al trabajador, puesto que el Juzgado de primera instancia esta exigiendo un requisito no contemplado en la Ley. Es asi como lo*

importante en el presente caso es acreditar la unidad de empresa y la dependencia de la subordinada con respecto a la matriz en cualquier momento para hacer responsable a FABRICATO S.A del cumplimiento de las obligaciones adeudadas por DIVISA S.A.S. Es así, como al presentarse la unidad de empresa en el año 1996 entre DIVISA S.A.S y FABRICATO S.A; origina que esta última, responda por las acreencias laborales de DIVISA S.A.S independientemente de que las mismas hayan sido contraídas al momento de la unidad o con anterioridad incluso si el predominio económico se acredite al momento de la unidad de empresa o con posterioridad. Reitero lo importante en el presente caso es acreditar la unidad de empresa, lo cual se probó, a pesar de que la misma se originara con posterioridad a la finalización de la relación laboral o de la constitución de la acreencia laboral y segundo demostrar el predominio económico sin consideración adicional, lo cual se probó, recordando que DIVISA S.A.S actualmente se encuentra liquidada”

Colpensiones: Indicó que se logró demostrar que entre el demandante y la empresa Divisa S.A.S liquidada, se realizaron una serie de contratos laborales como civiles. Que no se logró determinar que Fabricato S.A. fuera la sociedad matriz, debido a que no se evidencia predominio de la empresa principal con predominio de la otra. Que, en consecuencia, Fabricato S.A. no debe reconocer y pagar a favor del demandante, las cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones, con destino a Colpensiones por el periodo comprendido entre el 20 de junio de 1983 y 30 de abril de 1994 las cuales no fueron satisfechas por la sociedad Divisa S.A.S liquidada. Finalmente solicita que se confirme íntegramente la sentencia proferida en primera instancia.

CONSIDERACIONES:

Señala el demandante, señor Jairo Humberto Álvarez Tobón, que laboró al servicio de la sociedad Divisa S.A.S liquidada, empresa subordinada y controlada por Fabricato S.A, desde el 20 de junio de 1983 hasta diciembre de 2001 sin solución de continuidad en calidad de mecánico. Pretende como consecuencia, que se condene a Fabricato S.A. pagar a Colpensiones los aportes al sistema de seguridad social integral respecto de los períodos comprendidos entre el 20 de junio de 1983 hasta el 30 de abril de 1994 y a su vez el traslado del bono pensional del período mencionado a Porvenir S.A; por su parte, Fabricato S.A. se opuso a la prosperidad de las peticiones, advirtiendo que no existió relación laboral alguna con el demandante; finalmente el juzgado del conocimiento absolvió a las demandadas de la totalidad de las pretensiones incoadas en su contra, al considerar que no se

acreditó la unidad de empresa, ni el predominio económico de Fabricato S.A sobre Divisa S.A.S liquidada en el período reclamado, por lo que no da lugar a la condena del pago de aportes al sistema de seguridad social del período comprendido entre el 20 de junio de 1983 y 30 de abril de 1994.

Conforme a la apelación formulada por la parte demandante, el problema jurídico que abordará esta Sala del Tribunal se circunscribe a los siguientes temas: i) si existió o no unidad de empresa entre Divisa S.A.S liquidada y Fabricato S.A. y ii) la procedencia o no de una decisión ultra y extra petita.

i) Unidad de empresa entre Divisa S.A.S liquidada y Fabricato S.A.

Vale recordar que para que se configure esta entre personas jurídicas, deben concurrir la existencia de una sociedad principal o matriz y otra subordinada que se denomina filial o subsidiaria, respecto de la cual, la primera ejerce un predominio económico, que desarrollen actividades similares, conexas o complementarias y que tengan trabajadores a su servicio.

Para declarar dicha figura, también debe verificarse, como lo expresó la Corte Suprema de Justicia en sentencias SL15966-2016, SL6228-2016 y SL6313-2016, reiterada en la sentencia del 6 de septiembre de 2017, con radicado 51637, que si bien deben verificarse los anteriores elementos, también a efectos de declarar la existencia de dicha figura, debe observarse la finalidad con la que fue creada la nueva sociedad, para impedir el desmejoramiento de la situación de los trabajadores, a través de la fragmentación del capital o del tiempo necesario para acceder a algunas prestaciones o beneficios establecidos en la ley o en actos jurídicos extra legales, toda vez que la finalidad primordial en el derecho laboral es lograr la justicia en las relaciones entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social.

El numeral 2° del artículo 194 del Código Sustantivo de Trabajo, dispone lo siguiente en cuanto a dicho tema:

“...existirá unidad de empresa entre la principal y las filiales o subsidiarias en que aquella predomine económicamente, cuando, además, todas cumplan actividades similares, conexas o complementarias...”

A partir de lo anterior y descendiendo en el caso *sub examine*, tenemos que, como se observa en el documento “Informe de gestión 2016” así como en el “Informe de gestión 2017” visible en las páginas 98 y 120 respectivamente, Fabricato S.A. se encuentra registrada como grupo económico en la Cámara de Comercio de Medellín, siendo la matriz directa o indirectamente de Diversificación Industrial San Pedro S.A. liquidada, con un 52.50% del patrimonio de la empresa.

Ahora bien, el artículo 260 del Código de Comercio, el cual habla de matrices, subordinadas y sucursales, señala que “Una sociedad será subordinada o controlada cuando su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras personas que serán su matriz o controlante, bien sea directamente, caso en el cual aquella se denominará filial o con el concurso o por intermedio de las subordinadas de la matriz, en cuyo caso se llamará subsidiaria.”, complementado por el artículo 261 del mismo código del Código de Comercio, el cual indica que “...Será subordinada una sociedad cuando se encuentre en uno o más de los siguientes casos:

1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) del capital pertenezca a la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de sus subordinadas, o de las subordinadas de éstas...”

Acercas del predominio económico entre dos empresas, vale la pena traer a colación las motivaciones que expuso el Consejo de Estado en providencia del 8 de marzo de 1994, proferida por la sección segunda con ponencia de la Consejera DOLLY PEDRAZA DE ARENAS, en los expedientes 5933 y 5934, se expresó, que:

“...Conforme al artículo 260 del mismo código, la concurrencia de empresas vinculadas es útil para determinar que una empresa es subsidiaria de la matriz, que así logra su control económico, financiero o administrativo, pero ello no puede aplicarse para establecer predominio económico tal como lo entiende el artículo 194 del Código Sustantivo del Trabajo, o sea, como unidad patrimonial mayoritaria en un solo dueño.

Y eso es así, porque el artículo 261 del Código de Comercio dispone que hay vinculación de dos o más sociedades cuando existan intereses económicos, financieros o administrativos entre ellas, comunes o recíprocos, así como cualquier situación de control o dependencia y de la comunidad de intereses o de situaciones de control o dependencia puede derivarse un control de grupo pero no unidad patrimonial mayoritaria en cabeza de una sociedad que sin sus vinculadas no tiene más del 50% del capital de su subordinada.”

Así pues, para predicar el predominio económico que dispone el numeral 2° del artículo 194 del Código Sustantivo de Trabajo, se debe tener en cuenta el

concepto de unidad patrimonial mayoritaria en un solo dueño, por lo que, en el presente caso, Fabricato S.A. contaba con el 52.50% de las acciones de Divisa S.A.S. liquidada, por lo que se podría hablar en un principio de unidad de empresa.

No obstante, lo anterior, se observa en el certificado de Cámara de Comercio de Medellín allegada al despacho, que data del 20 de septiembre de 2016 (páginas 148 a 174) que, si bien el objeto social de Fabricato S.A. comprende entre otros, *“la fabricación y el mercadeo de materiales textiles, de confecciones y de telas no tejidas”*, siendo actividades conexas o complementarias a las realizadas por Divisa S.A.S liquidada, siendo estas la *“fabricación y mercadeo de materiales textiles de confecciones y de implementos deportivos”*, en el folio 171 se destaca que Fabricato S.A. fue matriz de la empresa Divisa S.A.S liquidada solo a partir del 13 de agosto de 1996, advirtiéndose que los períodos reclamados por el demandante obedecen a fechas anteriores en el que Fabricato S.A. tuvo el control y dominio de Divisa S.A.S. liquidada, esto es, del 20 de junio de 1983 hasta el 30 de abril de 1994.

Así las cosas, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, la libre formación del convencimiento y la valoración probatoria de que trata el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, donde operador judicial tiene la facultad de libre apreciación y ponderación probatoria y con base en ello, inclinarse por los medios demostrativos que le merecen mayor persuasión o credibilidad, que le permiten hallar la verdad real, siempre y cuando las inferencias sean lógicas y razonables, (Ver sentencias CSJ SL2049-2018, SL1469-2021 y SL2262-2022), esta Sala concluye que en el presente caso, tal y como se ha advertido a lo largo de esta providencia, se demostró que el señor Jairo Humberto Álvarez Tobón estuvo unido con Divisa S.A.S. a través de una relación laboral regida por varios contratos de trabajo y otro de carácter civil desde el 20 de junio de 1983 hasta diciembre de 2001; no obstante, de la prueba documental y testimonial decretada y practicada en el proceso, no se desprende prueba alguna que indique que Fabricato S.A. tuviese el control económico y administrativo de Divisa S.A.S antes del año 1996.

Lo dicho permite indicar que conforme a los principios que informan la carga de la prueba, incumbe probar las obligaciones o su extinción a quien alega aquellas o esta (Código Civil, artículo 1757) e incumbe a las partes probar el

supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen (Código General del Proceso, artículo 167, inciso 1°). En ese sentido, los postulados anteriores aplicados a un proceso ordinario significan, que al demandante le correspondía demostrar los presupuestos exigidos por el artículo 194 del Código Sustantivo de Trabajo, para predicar la existencia de unidad de empresa con relación a los periodos comprendidos entre 1983 a 1994, hecho que no sucedió.

Atendiendo a lo anterior, esta Sala del Tribunal coincide con las motivaciones del juzgado del conocimiento, esto es, que el demandante no cumplió con la carga probatoria para demostrar el dominio económico, financiero o administrativo de Fabricato S.A. sobre Divisa S.A.S en el periodo reclamado, y por tanto no existe ningún tipo de responsabilidad por parte de Fabricato S.A con el demandante. Por lo anterior, se deberá **CONFIRMAR** la sentencia de primera instancia

ii) Decisión ultra y extra petita

Con relación a las decisión ultra y extra petita, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencias SL2808-2018 y SL3850-2020, señaló:

“Así, la facultad extra petita -por fuera de lo pedido- requiere rigurosamente que los hechos que originan la decisión (i) hayan sido discutidos en el proceso, y (ii) que estén debidamente acreditados, a fin de no quebrantar frontalmente los derechos constitucionales al debido proceso con violación de los derechos de defensa y contradicción de la llamada a juicio.

Y por su parte, la ultra petita -más allá de lo solicitado- exige que la súplica impetrada en el escrito inicial, (i) sea inferior a la estatuida en la norma laboral, y que (ii) que no emerja del juicio que el mayor valor hubiese sido cancelado al trabajador acreedor.

Dichas facultades radican en cabeza de los jueces laborales de única y de primera instancia, y el juez de segundo grado, en principio, no puede hacer uso de ellas, salvo cuando se trate de derechos mínimos e irrenunciables del trabajador, siempre y cuando (i) hayan sido discutidos en el juicio y (ii) estén debidamente probados, conforme lo dispuesto en la sentencia C-968-2003 y tal y como lo ha señalado esta Sala en forma reiterada desde la providencia SL5863-2014.”

Asimismo, precisó la Corte en sentencia SL3790-2019:

“El juez de única o el de primera instancia, según el caso, puede excepcionalmente salirse de las pretensiones del actor, cuando en ejercicio de las facultades que le

confiere el artículo 50 del CPTSS, impone condenas extra o ultra petita, es decir, por fuera o por más allá de lo pedido.

Esa facultad, sin embargo, no es propia de los jueces laborales de segunda instancia, como lo ha dicho esta Corporación en innumerables oportunidades, y como lo precisó la Corte Constitucional en sentencia C-662 de 1998 que decidió sobre la exequibilidad del mencionado artículo 50, limitando esa posibilidad a los jueces de única o de primera instancia.

Lo anterior responde al llamado principio de congruencia, que en sentencia SL2010-2019, radicación 45045 del 05 de junio de 2019, sobre las facultades extra o ultra petita, la Corte Suprema precisó lo siguiente:

En ese sentido, en el proceso laboral ser congruente y coherente es una exigencia de primerísimo nivel, exigible tanto a los juzgadores como a las partes, además de un correlato de derechos fundamentales de gran importancia, como el debido proceso. Vale la pena aclarar, no obstante, que estas reglas procesales encuentran excepciones precisas en las facultades del juez de primera instancia de emitir fallos ultra o extrapetita; en el grado jurisdiccional de consulta a favor del trabajador y de ciertas entidades del Estado; y, en general, en el imperativo de hacer prevalecer el derecho sustancial en tratándose de derechos mínimos fundamentales e irrenunciables de trabajadores y afiliados al sistema de seguridad social.”

Y, más adelante, en la misma providencia indicó:

“La irrenunciabilidad de los derechos laborales tampoco es fundamento válido para que el tribunal dicte sentencia por fuera del marco del proceso y de los límites que le fije la parte inconforme con la decisión de primera instancia en el recurso de apelación, pues una cosa es que un derecho esté revestido de ciertas características especialísimas, y otra, muy distinta, es que por esa causa, el juez pueda resolver a su arbitrio sin tener en cuenta la posición de las partes en el proceso, y sin perjuicio de las precisas facultades legales que le permitan salirse de ellas, como es el caso del citado artículo 50 del C.P.T. y S.S”.

Por tanto, la inconformidad del demandante con la sentencia en cuanto a que, si bien, en las pretensiones no consta la declaratoria de contrato realidad, y por tanto se podría dar aplicación a los principios de ultra y extra petita, no tiene trascendencia alguna, toda vez que la Corporación ha precisado en innumerables oportunidades que dichas facultades corresponden a los jueces laborales de única y primera instancia siempre y cuando los hechos (i) hayan sido discutidos en el juicio y (ii) estén debidamente acreditados. En ese sentido, dichas facultades no radican en cabeza del juez de segundo grado, por lo que no es dable acceder a lo solicitado por el demandante, al no cumplirse con estos requisitos.

Corolario de todo lo dicho, la sentencia absolutoria que se revisa por vía de apelación merece ser **CONFIRMADA**.

Con los argumentos anteriores y atendiendo al principio de consonancia de que trata el artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad

Social, modificado por el artículo 35 de la Ley 712 de 2001, esta Sala hizo un pronunciamiento implícito de las alegaciones presentadas por el demandante y Colpensiones.

Las costas procesales de la primera instancia quedan como lo dijo el juzgado del conocimiento. Las de la segunda instancia, atendiendo a lo establecido en el numeral 1° del artículo 365 del Código General del Proceso y por no salir avante la apelación formulada por el demandante, son de su cargo y en favor de Fabricato S.A. De conformidad con lo señalado en el acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, como agencias en derecho en esta instancia se fija la suma de \$1.160.000.

Por lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley


RESUELVE:

Se **CONFIRMA** íntegramente la sentencia que se revisa por vía de apelación, de fecha y procedencia conocida.

Las costas procesales y agencias en derecho quedan como se dijo en la motivación de esta providencia.

Se notifica lo resuelto por **EDICTO**. De no ser susceptible del recurso extraordinario de casación se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Los Magistrados,



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ


CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA


HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ



SECRETARÍA SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	Jairo Humberto Álvarez Tobón
DEMANDADOS	Fabricato S.A. Porvenir S.A. Colpensiones
RADICADO	05-088-31-05-001-2020-00003-01
DECISIÓN	Confirma sentencia
MAGISTRADO PONENTE	Guillermo Cardona Martínez

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 14 de abril de 2023 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 14 de abril de 2023 a la 5:00pm

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO